

Movimiento 15-M: Expresión colectiva de una ciudadanía indignada¹

Antonio Antón Morón

Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Rebelión

El movimiento 15-M simboliza el conjunto de protestas sociales y cívicas de todo el lustro de 2010 a 2014, que es mucho más variado. Después de una década conviene este recordatorio para valorar con perspectiva histórica este amplio proceso de indignación popular y acción colectiva progresista y su impacto sociopolítico. Se trata de evaluar esta experiencia de la ciudadanía crítica y sacar enseñanzas para los retos presentes y futuros de los movimientos sociales y el espacio del cambio de progreso.

Madrid, mayo de 2021

El hecho relevante cristalizado en mayo de 2011, llamado movimiento 15-M, es la expresión pública y colectiva de una ciudadanía activa, de una izquierda social o sector progresista de la sociedad que se opone al reparto desigual de las consecuencias de la crisis y a su gestión liberal-conservadora, y exige responsabilidades a sus causantes y un cambio de políticas socioeconómicas. Habrá que ver la consolidación o no de esta corriente social indignada, su influencia en el sistema político y la gestión de la crisis, y sobre todo, la configuración de las diversas fuerzas sociales y sus formas asociativas y expresivas. Es una tendencia clara de intervención ciudadana en los asuntos públicos, es decir, en la política en sentido amplio, que condiciona la agenda, las políticas públicas y las dinámicas sociales.

Se pueden encontrar antecedentes de esta amplia movilización popular contra los grandes poderes establecidos. El más próximo es el del movimiento

¹ Extracto (revisado y sin citas) de los libros “Resistencias frente a la crisis. De la huelga general del 29-S al movimiento 15-M” (Germanía, 2011) y “Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica” (Sequitur, 2013).



contra la guerra de Irak en el año 2003, que había seguido a la huelga general del año 2002 contra las reformas laborales del PP; aunque ambas campañas con una diferencia significativa respecto a las movilizaciones actuales: entonces el *Partido Socialista* estaba en la oposición y colaboraba con ese rechazo ciudadano (y se benefició electoralmente), y ahora ha gestionado la política de recortes sociales (junto con algunas comunidades autónomas del PP), aparece con los poderosos y es uno de los blancos de la indignación popular (y ha disminuido su apoyo electoral).

No obstante, esta dinámica social está enraizada en dos elementos clave, distintivos del actual contexto, que le dan unas características específicas. Uno es la crisis socioeconómica y sus consecuencias de desigualdad social, evidentes desde el año 2008, y que sobre todo afectan a la gran precariedad laboral y el paro masivo, particularmente juvenil, al estancamiento o descenso de las trayectorias laborales y sociales y a nuevas brechas sociales. Estos aspectos existían anteriormente, pero ahora cobran una nueva dimensión y relevancia. Dos, es la gestión liberal dominante en la Unión Europea, dirigida por el bloque hegemónico conservador, y ejecutada en España por el Gobierno socialista, particularmente desde el giro de su política de carácter regresivo y antisocial en mayo de 2010, que rompe con sus compromisos sociales y su contrato con una amplia base social de izquierdas y genera una desafección ciudadana relevante hacia el PSOE; aunque, previsiblemente, la continúe e intente profundizar el PP tras las elecciones generales del 20-N.

Por tanto, existe una extendida conciencia social del carácter injusto de esa situación, rechazo popular y resistencias ciudadanas a esas políticas y exigencias de responsabilidades y garantías al poder económico y político. Todo ello expresa, en el escenario público, la importancia de la cuestión social y la relevancia de la acción por la igualdad socioeconómica y la profundización democrática, frente a las actitudes hacia el fatalismo, la idea de la inevitabilidad de esa política de ajuste duro o la ausencia de alternativas, propugnadas desde el poder institucional y mediático. Serán elementos constitutivos de este proceso, impulsado y representado por dos tipos distintos y sucesivos de agentes sociales. En un primer momento, sobre todo, por el sindicalismo –a lo largo del año 2010- y en un segundo momento –tras el cese de la movilización sindical, y desde la primavera del 2011- por el movimiento 15-M, con un papel menor o más secundario de la izquierda política, los grandes sindicatos –que firman el acuerdo social y económico de febrero- y otros movimientos sociales.

Esta nueva realidad social, la deslegitimación y la oposición popular a las medidas de recortes sociales y sus gestores, es amplia y persistente. Así,



es observada en diversas encuestas de opinión que reflejan un rechazo de hasta más de dos tercios de la población a las medidas más impopulares (desde los *Barómetros* del CIS de julio y octubre de 2010, tras el plan de ajuste de mayo y la reforma laboral y la huelga general, respectivamente, hasta las investigaciones recientes sobre la simpatía mayoritaria hacia el movimiento 15-M). Además de la gran legitimidad social de sus aspiraciones, esa corriente social se ha expresado de forma activa, pacífica y democrática con una amplia participación popular: desde las grandes manifestaciones sindicales de principios del año 2010 y la participación huelguística de unos cinco millones de asalariados en el 29-S, hasta los varios centenares de miles de las movilizaciones del movimiento 15-M.

Esa corriente social indignada y esa ciudadanía activa existen, y es un nuevo elemento positivo y clave en el escenario sociopolítico. No es una tendencia 'pasional' (o irracional o populista). Se asienta en una conciencia colectiva, reflexiva y realista, del carácter injusto del reparto de los costes de la crisis y su gestión institucional. Las evidentes dificultades transformadoras inmediatas no han llevado al fatalismo (ni a ser 'ilusos') sino que la lucidez sobre la gravedad de la situación y la dimensión de los poderosos ha generado una mayor maduración y persistencia de esa indignación popular y esa aspiración de cambio. Por tanto, refleja valores progresistas de justicia social e igualdad y una cultura democrática y solidaria, aspectos que caracterizan a los sectores socialmente más avanzados de la sociedad. Esta corriente popular crítica se manifiesta en el debate público, aunque esté por ver su dimensión, cómo se articulan la continuidad de sus procesos de expresión y movilización, su consistencia y sus consecuencias políticas (en el plano electoral y la renovación de las izquierdas). Y, particularmente, cómo se conforma su representación social, qué alcance y qué combinación van a tener los dos principales movimientos sociopolíticos que, de diferentes formas y distintos momentos, han canalizado el malestar ciudadano y la indignación popular: el sindicalismo y el movimiento 15-M.

1. Un movimiento social democratizador, pacífico y sociopolítico

El movimiento 15-M representa una significativa respuesta colectiva a dos de los problemas más importantes que tiene actualmente la sociedad: las consecuencias sociales de la crisis económica con la precariedad laboral y el paro masivo, particularmente juvenil, y el distanciamiento del sistema político e institucional de la voluntad de sectores significativos de la ciudadanía. La persistencia, profundidad e interrelación de esos dos elementos ha generado



una profunda indignación popular que se ha transformado en acción colectiva. Su crítica se dirige contra los responsables de la crisis económica y de empleo y los gestores de una política liberal-conservadora que no ofrecen una salida justa a esta situación, ponen el acento en el recorte de los derechos sociales y laborales y se subordinan al dictado de los grandes poderes económicos y financieros.

Esta acción colectiva está incrustada en la indignación ciudadana ante la grave situación actual y la exigencia de responsabilidades a los poderosos, rechaza los discursos legitimadores dominantes y se rebela contra el fatalismo y la impotencia. Refleja la amplitud y la profundidad de una conciencia popular crítica contra esa dinámica y refuerza la esperanza de cambio. Sus objetivos apuntan a cambios profundos en esos dos ámbitos entrelazados: una gestión social y progresista de la crisis socioeconómica, y mayor democracia. La primera fase de movilizaciones que comienza el mismo 15 de mayo de 2011 ya ha tenido unos resultados positivos y ha alcanzado unos objetivos básicos. De su consolidación y desarrollo dependerá la dimensión de sus efectos de fondo y a largo plazo. Aquí se analizarán sus características, sus límites y las dificultades para su continuidad. Veamos algunas de sus características partiendo el análisis de su experiencia y textos de sus protagonistas.

Primero, el movimiento 15-M (y sus derivaciones posteriores como el 25-S o la Marea ciudadana) es una movilización de carácter social y progresista que defiende los intereses de capas desfavorecidas, con mayores incertidumbres laborales y de acceso a la vivienda (desahucios), la gente precaria y parada, y plantea unas propuestas sociales y económicas basadas en el refuerzo del acceso a un empleo decente, los derechos sociales y laborales y una mejor distribución de la riqueza. La masividad y la persistencia del paro y la precariedad laboral, particularmente juvenil, la presión y el autoritarismo empresariales y la falta de credibilidad de las políticas públicas para superarlos configuran un punto central de su indignación y del apoyo social recibido. Esa realidad de paro y precariedad laboral ya existía antes de la crisis afectando a las identidades juveniles, pero ahora cobra una nueva dimensión.

Segundo, es un movimiento democratizador, en un doble sentido. Por un lado, denuncia ese déficit democrático de la gestión dominante de la política socioeconómica que, salvo matices, comparten las grandes instituciones políticas españolas y europeas. Así, exige al sistema político una mayor vinculación a los deseos y opiniones de la sociedad, la no subordinación de la política a los mercados financieros y el fortalecimiento de la democracia. Por otro lado, señala las insuficiencias democráticas del sistema de representación



electoral y los privilegios y corruptelas de parte de la clase política, reclama una regeneración democrática con mayor adecuación representativa, honestidad de los políticos y transparencia de las instituciones y promueve la participación activa de la ciudadanía.

En tercer lugar, es un movimiento pacífico, profundamente democrático y solidario y de composición fundamentalmente juvenil. La mayoría de jóvenes, incluido los ilustrados y con mayor nivel educativo, sufren un bloqueo cuando no un retroceso en sus expectativas laborales y profesionales y, por tanto, en sus proyectos de vida. Se ha producido una acumulación de tres dinámicas: frustración social; representación de opiniones y aspiraciones de amplios sectores populares alternativas a las del poder establecido, y voluntad de cambio con mecanismos adecuados para facilitar su expresión democrática. Sus adversarios –los poderosos- son muy fuertes institucionalmente y la forma de enfrentamiento debía evitar –o disminuir- la tergiversación mediática y el aislamiento popular y reflejar la fortaleza propia: la difusión de sus mensajes para conseguir unos apoyos masivos, una gran legitimidad democrática. Para ese movimiento era esencial evitar la violencia o su represión, reafirmar sus mecanismos pacíficos y democráticos y consolidar la simpatía de la mayoría social, frente a la ilegitimidad de muchas medidas adoptadas por el sistema político –Gobierno, Parlamento y UE- que es su principal debilidad. Su instrumento, tras la gran manifestación del 15-M del año 2011, han sido las acampadas en las plazas públicas como demostración de firmeza y compromiso de miles de activistas, foco de participación, debate, decisión y comunicación de la ciudadanía más activa (varias decenas de miles) y, además, canal de simpatía y solidaridad de gran parte de la sociedad. Así, más del 60% de la población están de acuerdo con algunas de sus medidas y aprueban sus actividades, porcentaje que aumenta entre la gente joven y los votantes de izquierda (ver Índice de Opinión Pública –IOP- de *Simple Lógica*, de junio-2011 y encuestas de *Metroscopia*).

En cuarto lugar, este movimiento tiene un carácter transversal y sociopolítico, sin ser partidario. Se ha constituido y puede ampliar su función como plataforma ciudadana sociopolítica. Su inserción en ciudades, pueblos y barrios favorece esa articulación desde abajo y descentralizada y su conexión con el resto del tejido asociativo. Supone un cuestionamiento de la clase política dominante y sus principales políticas regresivas, y expresa la exigencia de un importante cambio social: la orientación liberal de las políticas económico-sociales y las deficiencias de legitimidad del sistema político. Por tanto, tiene una dimensión política, estimula y encauza la participación ciudadana en asuntos públicos fundamentales; pero no tiene una definición



partidaria ni electoral concreta, ni está subordinada a ello. No es una movilización sectorial o una suma de demandas particulares. Expresa una aspiración de reforma profunda de la dinámica socioeconómica y laboral y de fortalecimiento democrático con mayor papel de la ciudadanía en la configuración del sistema político, sus instituciones y sus políticas. En ese sentido, se puede asociar a las posiciones más progresistas de la izquierda social y otros grupos sociales frente a las políticas de ajuste y austeridad, por un aparato productivo y económico más avanzado, sostenible y justo, así como la defensa de un modelo social y un Estado de bienestar más democrático e igualitario.

2. Cristalización y expresión pública del movimiento

Este proceso ha culminado dos fases, y ha iniciado una tercera: primera, la conformación de la indignación popular hasta la cristalización del movimiento con la gran manifestación del 15-M del año 2011; segunda, una expresión pública colectiva en numerosas ciudades como foco de denuncia, capacidad de propuestas alternativas y polo simbólico y convergente de voluntad de cambio; se ha producido, fundamentalmente, con una presencia física masiva en el espacio público –acampadas, asambleas y concentraciones-, acompañada por la utilización generalizada de nuevas redes sociales y de comunicación. Esa segunda etapa ha sido más densa durante el primer mes de concentraciones permanentes y hasta la gran manifestación del 19 de junio contra el Pacto por el euro. Tras ella, se ha abierto una tercera fase que permita la continuidad de la acción colectiva tras esos objetivos generales. Así, tras el paréntesis parcial del verano ha vuelto a demostrar el 15 de octubre de 2011 su gran capacidad de movilización y expresión colectiva por el cambio global. Veamos brevemente las características de este proceso y los logros conseguidos para definir mejor lo que falta por hacer y las perspectivas.

La dinámica de maduración y expresión de este movimiento está incardinada en dos elementos fundamentales antedichos: la persistencia del estancamiento económico y del empleo con graves consecuencias sociales, y la desconfianza popular en unas políticas y unas instituciones que no ofrecen una respuesta social sino que se doblegan ante los mercados financieros. Esa conciencia ciudadana se va consolidando a lo largo del año 2010. Por un lado, se produce mayor indignación por el paro masivo, el bloqueo de las trayectorias laborales y sociales, la aparición de nuevas brechas sociales y las tendencias de retroceso del bienestar y la seguridad socioeconómica. Por otro lado, se genera una profunda decepción con la gestión del gobierno socialista –



particularmente tras su giro antisocial de mayo de ese año, amparado en las medidas conservadoras europeas- que rompe sus compromisos sociales y se vuelca en una gestión impopular de la política socioeconómica que, según encuestas de opinión (CIS, de julio y octubre de 2010), rechaza la mayoría de la ciudadanía. Incluso tras la huelga general del 29 de septiembre –con cerca de cinco millones de huelguistas y dos tercios de la ciudadanía que rechazaban la reforma laboral y las medidas gubernamentales- el Gobierno no rectifica y reafirma su política de ajustes. El siguiente recorte relevante de derechos sociales es el de las pensiones públicas, en febrero de 2011, que también es rechazado por la mayoría de la sociedad, según las encuestas del CIS (marzo 2011); esto a pesar del aval de los dirigentes sindicales mayoritarios que con su firma disminuyen su prestigio y liderazgo ciudadano, y abren una brecha de desconfianza con parte de la izquierda social y sus propias bases, generándose un cierto vacío representativo.

Por otro lado, esa mayoría social crítica con las políticas de austeridad había contado con una importante representación y encauzamiento de su malestar a través de la acción de los sindicatos, particularmente con la huelga general del 29-S que suscitó apoyos de la mayoría popular a sus objetivos. No obstante, el giro de los dirigentes sindicales al renunciar a exigir de forma firme y prolongada una rectificación profunda de esa política regresiva y avalar en febrero del año 2011 los recortes de los derechos de las pensiones futuras, además de constituir un error estratégico, es visto como un mayor desamparo por gran parte de la ciudadanía descontenta e indignada. Esa actuación de los aparatos sindicales mayoritarios tiene dificultades de legitimación social y el vacío representativo producido, lejos de afianzar el pesimismo y la fragmentación del descontento social, da pie a la oportunidad de que el fuerte malestar existente se exprese por otra vía autónoma.

La persistencia de la crisis, la falta de credibilidad institucional sobre su salida inmediata, el rechazo a su gestión antisocial, la desafección hacia la clase política, junto con la ausencia de otros grandes movimientos o grupos sociales que encaucen esa profunda indignación, confluyen en mayo de 2011 con ocasión de la campaña electoral municipal y autonómica. Una iniciativa adecuada y en el momento oportuno de varios grupos de jóvenes, con poca estructura organizada pero muchos vínculos en las redes sociales, se conecta con la conformación de esa profunda indignación popular, y cristaliza el movimiento. Así, se introducen en el debate público los auténticos problemas de fondo de la ciudadanía, y se genera un polo representativo del descontento y las aspiraciones populares de cambio que condiciona la agenda mediática y política.



Se produce una convergencia de tres niveles de implicación: una amplia ciudadanía indignada -mayoritaria en la sociedad respecto de esos dos ejes de descontento y exigencia de cambio-; una ciudadanía más activa –varios centenares de miles que participan en la acción colectiva-, y un sector de activistas –unos pocos miles más comprometidos, sobre todo jóvenes y promotores de las ideas fuerza y las iniciativas-. El movimiento social del 15-M, en sentido más estricto, es la expresión pública de estas dos últimas dinámicas: ciudadanía activa, y activistas. No se puede reducir a este último grupo, que es la parte más permanente y organizada. Tampoco se puede comprender sin la existencia y simpatía de esa corriente mayoritaria de ciudadanía indignada.

Ese largo proceso de maduración se transforma en acción colectiva continuada durante un mes de grandes concentraciones diarias; se desarrolla su componente expresivo, se divulgan sus objetivos generales, se fortalece una conciencia popular crítica y se amplía la simpatía ciudadana hacia ellos. Se completa el movimiento con una mayor descentralización e implicación en barrios y ciudades y un desarrollo programático y de propuestas sectoriales. La clase política dominante, dentro de su perplejidad, intenta contenerlo, desprestigiarlo o ningunearlo. No puede atacarlo frontalmente sin riesgo de perder, todavía más, parte de su credibilidad social.

El paso de la frustración (pérdida de esperanza) al descontento (desagrado) y hasta la indignación supone una valoración ética del carácter injusto de esa dinámica regresiva y su gestión política. Refleja un avance en la conciencia social y democrática como antesala a la exigencia de cambio. El paso a la acción colectiva democrática y solidaria se produce al considerar una parte de la ciudadanía que los motivos de la indignación son graves, profundos y duraderos, y los mecanismos institucionales son insuficientes o están bloqueados. La prolongación de esa doble dinámica económica y de gestión política, el agravamiento de sus consecuencias sociales y el agotamiento de las expectativas de una salida institucional justa son un motivo de fondo para dar continuidad a la indignación, la protesta colectiva y la exigencia de cambio social.

Por tanto, el paso a la acción colectiva progresista se produce cuando se consolida esa indignación, aumenta la desconfianza en las respuestas del sistema político y se legitima la necesidad de la movilización social para exigir cambios. En esa situación se acumula una coyuntura de especial relevancia política –las elecciones municipales y autonómicas-, junto con la conformación de unos grupos de activistas decididos, con una orientación acertada de los dos grandes cambios o reformas: democratización del sistema político -



democracia real, ya-, como adecuación de las decisiones institucionales a la voluntad de la mayoría de la sociedad, imponiéndose a los 'mercados'; y otra política y gestión más justa ante la crisis económica. Además, aciertan con un sistema de expresión popular (manifestación del 15-M, acampadas con concentraciones masivas y simpatía ciudadana, manifestaciones de junio y julio) y la comunicación generalizada y en red.

Este distanciamiento crítico tanto de los partidos de derecha como del *Partido Socialista* constituye una brecha de desconfianza de parte de la ciudadanía hacia el sistema político que marca profundamente la identidad de este movimiento. Supone intentar la superación de la orfandad popular respecto de la representación institucional. Así, el déficit democrático del sistema político sólo se podría resolver mediante la rectificación de esas medidas y el respeto de la clase política a esas demandas populares mayoritarias –según las encuestas de opinión, si hubieran sido objeto de consulta mediante referéndum no habrían contado con la aprobación popular-. Sólo así se incrementaría la legitimidad de las instituciones políticas y se fortalecería la democracia. Pero lejos de escuchar y tomar nota, las derechas y particularmente el partido socialista, con un evidente retroceso de apoyo electoral, siguió reafirmandose en la continuidad de su política de recortes sociales (reforma constitucional) con el riesgo de mayor desafección ciudadana, aunque esperando el debilitamiento de la presión democrática por el cambio.

3. Representación y democracia

Existe una relativa crisis de la representatividad de las élites políticas actuales. La clase política aparece en los últimos Barómetros del CIS no como la solución, sino como el tercer gran problema de la sociedad (tras el paro y las incertidumbres económicas), y goza de una limitada confianza popular.

Por otro lado, existen distintos sistemas de representación y élites diversas. La respuesta a la complejidad y la diversidad de esa población descontenta y sus distintos niveles de implicación y posiciones ideológicas, requiere una acción y una dinámica organizativa profundamente democráticas, resolviendo bien las formas de la necesaria delegación, coordinación y representación, así como el respeto al pluralismo y la actitud integradora y unitaria.

Existe una opinión extendida en parte de la ciudadanía más activa, particularmente algunos activistas del movimiento 15-M, que se expresa con la idea 'no nos representan', y dirigida fundamentalmente a los grandes partidos



de poder (PP, PSOE, CIU). No obstante, también llega a afectar, en tono diferente, al resto de la izquierda política (IU-ICV, ERC, BNG...) o a las propias estructuras sindicales. Esa idea no es cierta por lo que se refiere a millones de personas que simpatizan, en mayor o menor medida, con ese movimiento y cuya posición es más ambivalente: apoyan sus ideas básicas (contra las consecuencias de la crisis y la política de recortes sociales, y mayor democracia), aunque también pueden seguir afiliados a los grandes sindicatos y confiar en su función defensiva, o votar al partido socialista (o a otros grupos más a la derecha). Entre sectores progresistas o de izquierda social se produce una combinación de actitudes entre esa expresión de indignación representada por el movimiento 15-M y la vinculación hacia la actividad defensiva de los sindicatos o con el apoyo electoral hacia opciones políticas aun con desacuerdos significativos respecto de la gestión de sus líderes.

Ese movimiento que ha recogido un sentir mayoritario de la ciudadanía en la expresión de su indignación no puede totalizar la representación del conjunto de sus deseos y aspiraciones, particularmente de los otros dos planos cuya intervención está mediada por otros mecanismos, necesidades y estructuras: el sindical, y el político-electoral. Así, hace bien en considerarse un movimiento 'social', de carácter sociopolítico y vocación transformadora, pero ser autónomo frente a la acción electoral y las organizaciones partidistas y/o sindicales, exigiendo mayor democracia y representatividad del sistema político, y siendo prudentes en su intervención directa en esos campos.

No obstante, esa idea impugnadora de la representatividad de la clase política sí es expresiva de una parte más activista de ese movimiento que se fundamenta en algunos elementos críticos, incluyendo algunas actuaciones de los dirigentes de la izquierda política y los grandes sindicatos.

Por otro lado, nuevas élites emergentes, vinculadas al movimiento 15-M, pugnan por confirmarse y legitimarse socialmente, prevenir su marginación y evitar su neutralización o su absorción institucional. Utilizan una crítica anti-jerárquica y anti-elitista frente a esas estructuras políticas y sindicales instaladas, y aportan un saludable ejercicio participativo y anti-burocrático. En ese sentido, es todavía más importante el talante democrático y unitario, evitando esquematismos y reacciones sectarias.

Además, como todo movimiento emergente con una base amplia, deben establecer los mecanismos de relación y comunicación para rellenar también la distancia entre la parte activa (con alta participación asamblearia, deliberativa y comunicativa en las redes sociales) y los centenares de miles, incluso de millones que, en un mayor o menor grado, simpatizan con propuestas decididas por los primeros pero cuyo apoyo tampoco es incondicional, ni total o



permanente. Los vínculos entre las dos partes son indirectos y condicionados por los medios de comunicación, el acontecer sociopolítico y las formas y oportunidades de las actuaciones colectivas más o menos masivas. Todo ello supone abordar también las formas de la delegación a sus representantes o portavoces y la coordinación organizativa, junto con afinar las críticas y establecer los puntos de colaboración adecuados con el resto de tejido asociativo progresista.

4. Consolidación del movimiento y futuro abierto

La masiva participación ciudadana en las manifestaciones del 15 de octubre del año 2011 por el cambio global, promovidas por el movimiento 15-M, con amplia extensión en otros países, demostró la continuidad, persistencia y masividad de esa corriente social indignada y su compromiso por una transformación socioeconómica y política, profunda y progresista. Se ha expresado colectivamente de forma autónoma, sigue enfrentándose al poder establecido, económico y político, y exige una profundización de la democracia.

La clase política dominante, aun con algunas diferencias, ha seguido adoptando decisiones (reforma constitucional, precarización del empleo, recortes sociales) a espaldas de la población. Su orientación liberal-conservadora impulsada desde la UE, continúa siendo la subordinación a los intereses de los mercados financieros y la reafirmación de las políticas de ajuste y austeridad (para las capas populares). Mientras tanto, aumenta la gravedad de las consecuencias sociales de la crisis, con paro masivo, menor cobertura del desempleo, disminución del poder adquisitivo de los salarios..., junto con los esfuerzos suplementarios para pagar las hipotecas o frente a embargos y desahucios.

Es una cruda realidad a la que la ciudadanía activa da respuesta desde su participación directa en el espacio público. Esas grandes manifestaciones en España constituyen una fuerte expresión colectiva de rechazo a esos dos elementos clave: políticas de recortes sociales ante las consecuencias injustas de la crisis, y gestión impopular de las instituciones públicas. Sus dos alternativas centrales –cambio de la política socioeconómica, y mayor y mejor democracia- siguen vigentes y reforzadas por el objetivo de conjunto de exigencia de ‘cambio global’.

Este movimiento social está enraizado en la realidad social y material, conecta con los problemas socioeconómicos y políticos fundamentales de la ciudadanía, goza de la simpatía de la mayoría de la sociedad, y es capaz de articular una implicación activa de centenares de miles de personas –gran parte



jóvenes-. Además de resistir y oponerse a esas políticas neoliberales, plantea un horizonte de cambio global, exigiendo otro modelo económico –más justo y basado en las necesidades de la sociedad no de los mercados- y una estructura política más democrática, con mayor consideración a la opinión y la participación ciudadanas.

Esta expresión colectiva tiene diversas limitaciones derivadas de su reciente emergencia como movimiento social. En particular, es pronto para aventurar su proyección futura. No obstante, tiene unas características y ha obtenido ya unos resultados meritorios. La principal tiene un carácter expresivo y sociopolítico, y ha conseguido consolidar una amplia conciencia social de indignación y transformarla en una acción colectiva progresista, igualitaria y solidaria contra los poderes establecidos.

Pero no hay que infravalorar o tergiversar ese carácter expresivo. Esa dinámica social contribuye al fortalecimiento de la actitud crítica de gran parte de la sociedad ante los planes de los poderosos y, por tanto, constituye el paso imprescindible para cambiarlos. Si es temido ese movimiento es, sobre todo, por esas expectativas de cambio de las políticas dominantes y las estructuras de poder. Primero, la superación del sometimiento y la resignación de la población, situación buscada por los poderes políticos y económicos, por sus discursos y la mayoría de los medios de comunicación a su servicio: incrementar la deslegitimación social a sus políticas antisociales y fortalecer la indignación ciudadana y la exigencia de justicia social. Segundo, la visibilidad pública de una ciudadanía activa comprometida con un cambio social profundo, condicionando la agenda política y las decisiones económicas e institucionales. Ambas cosas ya se han alcanzado en gran medida, aunque no hay garantías de su permanencia a medio plazo. En ese sentido, están abiertas las opciones y desde el campo progresista hay que definir una actitud.

Por supuesto, este proceso no ha obtenido todavía resultados significativos en la transformación de esas políticas y la democratización de las instituciones políticas. Pero se ha iniciado el mejor camino posible para ello: fortalecer la conciencia social indignada y la presión social y colectiva de una ciudadanía activa. Frente a los designios de la sumisión y la impotencia ante una gestión de la crisis liberal-conservadora y una salida regresiva e injusta, se ha generado un freno 'social' a esa involución socioeconómica y política y se ha levantado la esperanza ciudadana del cambio global. Nada más y nada menos.

Estamos en medio de una prolongada pugna democrática para consolidar o no esa política conservadora ante la crisis y sus élites gestoras y promover su cambio. La existencia de unos dos tercios de la población que



desde hace ya varios años consideran el paro (y no el déficit o la deuda públicos) la preocupación principal para reorientar las políticas económicas y de empleo (decente) y que están en desacuerdo con los recortes sociales, es un gran valor colectivo, una fuerza social a consolidar y fortalecer. Todo el poder institucional y mediático no han podido diluir esa conciencia social, base de la indignación ciudadana. Esa batalla democrática y pacífica, el desafío de la parte más solidaria de la sociedad a esa situación y esas políticas, con su falta de legitimidad social, es una cuestión crucial. Para fortalecerla también es imprescindible la activación de los sectores más comprometidos y su conexión con esa amplia corriente social. Además, dado el poder institucional de los adversarios, la implicación y el compromiso de esa parte de la ciudadanía activa, con su expresión pública en la calle, las redes sociales y las relaciones sociales, refuerza esa conciencia social ciudadana y condiciona las decisiones institucionales.

Participar en esa actividad solidaria, compartir esa experiencia colectiva, es emotivo y emocionante, crea lazos interpersonales, transforma las propias personas comprometidas, mejora su calidad democrática y, también, posibilita sus vínculos con la realidad social. Como en casi todos los movimientos populares progresistas, las bases de su acción son las actitudes morales, su sentido de la justicia social. Pero, combinado con una relativa espontaneidad e inmediatez en la expresión del malestar, también supone una capacidad crítica y reflexiva. No se puede desvalorizar ese movimiento calificándolo, simplemente, como 'pasional' o 'emocional'. Y menos contraponerlo a un supuesto sujeto social ideal (inexistente en la historia) que tuviese 'alternativas' reales y un pensamiento (complejo) y fuera sólo 'racional'.

Este movimiento ha demostrado tener unas ideas-fuerza sencillas – frente a los mercados financieros y la gestión antisocial de la clase política y por una democracia real-, pero enraizadas en lo más profundo de la sociedad y la conciencia ciudadana. No son ideas etéreas, irreales, ambiguas o difusas. Son ideas (pensamiento) más justas, rigurosas y científicas que muchos discursos y teorías de cierta élite académica, política y mediática. Son más acertadas y realistas que las proporcionadas por parte de la ciencia económica y el pensamiento político convencional. Además, tienen un valor ético más profundo, expresan una subjetividad progresista y presentan un horizonte de cambio y transformación más igualitario y democrático que la mayoría de la actual clase política liberal o social-liberal.

En ese sentido, no son acertadas las valoraciones de algunos ensayistas como Bauman al afirmar el carácter 'emocional' y sin pensamiento de este movimiento, y aventurar su 'evaporación'. Con su terminología, existen muchos



fenómenos 'líquidos'. La cuestión presente es que el sufrimiento y la incertidumbre de muchos millones de personas es un hecho social muy 'sólido', incluso trágico, que esa tendencia social de indignación es persistente y con gran arraigo en la sociedad y que la acción colectiva y resistente de una ciudadanía activa ante tanta precariedad e injusticia tiene sólidos motivos y objetivos justos para continuar hasta que cambien esas circunstancias.

La dinámica conformada por esa ciudadanía indignada, en una situación especialmente dura y complicada, se incardina en los mejores valores democráticos e igualitarios de los movimientos sociales progresistas o la izquierda social europea de las últimas. Es difícil pronosticar el alcance de su maduración y ampliación o su debilitamiento. Los agoreros que pronosticaban que se iba a diluir tras el verano del año 2011 (o el invierno posterior) han errado, y como han demostrado las multitudinarias manifestaciones recientes (23 de febrero y 12 de mayo de 2013), sus iniciativas siguen teniendo un gran apoyo popular activo. La cuestión es su legitimidad y su oportunidad, y la actitud a definir es el trabajo por su consolidación y la aspiración por su mejora.

Existen tendencias sociales ambivalentes, pero su futuro se ventila en el campo de la acción social o sociopolítica, en la continuidad y la ampliación de un potente movimiento social y su articulación con el tejido asociativo popular, en la disputa democrática y la pugna por la legitimidad social entre la ciudadanía indignada y los poderes establecidos.

Para ello es importante la combinación de dos planos de la actividad (aparte de la comunicación a través de las redes sociales y los procesos deliberativos de las iniciativas) tal como lo vienen haciendo. Por un lado, una actividad local, descentralizada o sectorial (como la acción contra los desahucios), junto con el resto de tejido asociativo, que le da mayor enraizamiento en la sociedad y resultados reivindicativos más inmediatos. Por otro lado, unas movilizaciones generales que concentren y expresen en el espacio público su legitimidad social, la capacidad expresiva, la credibilidad de sus objetivos por el apoyo masivo conseguido.

Es pertinente la investigación, el estudio y la discusión teórica, a veces en conflicto con la difusión de mensajes simples. Ello supone un esfuerzo de clarificación y debate abierto y plural, particularmente de sectores más activos y con mayor responsabilidad en la orientación del movimiento. No obstante, lo principal para un movimiento social es el enganche con la problemática y las aspiraciones de la mayoría de la sociedad y el acierto en trasladarlo en lemas e iniciativas. Para reforzar eso es para lo que se necesita un pensamiento crítico y una renovada teoría social.



Este movimiento 15-M (o similar) se ha expresado colectivamente de forma autónoma al sindicalismo mayoritario y se sigue enfrentando al poder establecido, económico y político. Su devenir, la continuidad de la implicación participativa de una amplia ciudadanía activa, es fundamental para configurar el clima social y la pugna frente a la crisis socioeconómica y la estrategia de austeridad. Ello va a condicionar también la gestión sindical, cuyos interlocutores tienen menos margen de maniobra para acordar retrocesos sociales con Gobierno y/o patronal, sin caer en el riesgo de una profunda deslegitimación entre la ciudadanía activa y/o parte de sus propias bases sociales. Por tanto, es conveniente un sindicalismo más firme, activo y renovado y una mejor comunicación con el movimiento 15-M y la orientación y la dinámica que expresa. Ambos movimientos, lejos de la desconsideración o el sectarismo mutuo manifestados por algunos de sus respectivos portavoces, tienen más que ganar con una colaboración democrática por el cambio social, potenciando una ciudadanía activa en parte compartida entre ellos y junto con otros grupos de izquierda y progresistas.

En definitiva, el 15-O del año 2011 demostró la continuidad y madurez de un movimiento potente, con buena orientación, gran arraigo social y un fuerte compromiso con el cambio global. Existen componentes frágiles derivado de la fuerte desigualdad respecto del gran poder institucional y mediático de los 'poderosos'. También es un movimiento joven y emergente, con fragmentación de grupos de activistas, pero esa dificultad está corregida parcialmente por sus grandes esfuerzos comunicativos y su actividad colectiva de deliberación y decisión. Cabe la disociación entre los tres niveles o el declive de uno o varios de ellos: ciudadanía indignada, ciudadanía activa y grupos de activistas. Sus bazas para persistir y consolidarse son su gran legitimidad social y el acierto en sus exigencias clave y las formas expresivas para encauzar la indignación de la ciudadanía. Y tras la victoria electoral del PP, el nuevo reto es la respuesta ciudadana a sus nuevos planes de austeridad.

En conclusión, ese movimiento ha cubierto con éxito algunos objetivos básicos: fortalecer una conciencia popular sobre esas dos exigencias de fondo –giro a la política socioeconómica y democratización del sistema político–; introducir propuestas de cambio en la agenda mediática y política; organizar un movimiento social potente, democrático y pacífico, y generar un proceso de articulación del tejido asociativo y de participación ciudadana. Tres retos aparecen para garantizar su continuidad y consolidación, teniendo en cuenta sus fortalezas y debilidades.

Primero, la reafirmación de sus objetivos centrales o señas de identidad, complementados con propuestas más concretas y particulares. A corto plazo



son difíciles de conseguir, incluido algunas reivindicaciones parciales –como la reforma de la Ley Electoral-, por la determinación contraria de la mayoría de la clase política. Sin embargo, apuntan a cuestiones fundamentales para la sociedad y cuentan con gran aceptación popular.

Segundo, la prolongación, con otras formas y ritmos, de la masividad y la persistencia de las actividades expresivas, de movilización y comunicación. Ello supone, por una parte, innovar dinámicas de acción colectiva, integrar actividades descentralizadas y focos de polarización ciudadana, y, por otra parte, reflexionar sobre los sistemas organizativos internos de debate y toma de decisiones, la conformación de liderazgos, representantes o coordinadores, abordando un proceso organizativo más amplio, complejo, plural y diverso, que exige revisar la experiencia y mejorar los mecanismos que tienen más limitaciones.

Tercero, apostar por la ampliación y el fortalecimiento del movimiento, la vinculación con más redes sociales y la convergencia con diferentes grupos sociales y sociopolíticos que puedan compartir objetivos sustantivos o parciales.

Las posibilidades de avanzar en los objetivos dependen del grado de apoyo popular. La influencia y el condicionamiento a los poderosos y al sistema político deben estar asentados en una gran legitimidad popular; se trata de una prolongada pugna democrática y pacífica contra los poderes establecidos para promover un cambio sustancial. En el horizonte se dibuja la aspiración por una salida social y progresista a la crisis socioeconómica, una política europea más justa, cooperativa y solidaria y una democracia más avanzada. En resumen, una apuesta por la sociedad -la ciudadanía y las personas- y no por el poder establecido y los mercados.

5. La ciudadanía indignada es el comienzo de la solución

La participación popular en las manifestaciones convocadas por el movimiento 15-M el pasado 12 de mayo del año 2012, junto con las movilizaciones y procesos deliberativos anteriores y posteriores, han demostrado la persistencia de una amplia ciudadanía activa. Han participado varias decenas de miles en Madrid y en Barcelona, así como en el conjunto de más de cincuenta ciudades de todo el Estado. Una presencia menor y simbólica ha sido la de otras capitales europeas. Los motivos del año anterior para expresar indignación siguen vigentes y se han reforzado: oposición a las consecuencias injustas de la crisis económica y los recortes sociales; crítica a los mercados financieros y los gestores institucionales dominantes como



responsables de una política regresiva; exigencias de cambios socioeconómicos y mayor y mejor democracia, con estímulo de la participación cívica y democrática.

Esa amplia indignación ciudadana se ha expresado en el ámbito público y se ha convertido en una masiva participación cívica y pacífica frente a una gestión política antisocial. Una idea de fondo que subyace en esa movilización progresista es que primero es la sociedad, las personas, y sometidos a esa voluntad ciudadana después deberían estar las instituciones políticas y económicas, particularmente, los mercados financieros. Es una posición nítidamente democrática, de reafirmación de la soberanía popular para desde ella definir las políticas y los proyectos de la sociedad, frente al imperio del beneficio privado que dictan las leyes económicas liberales y las élites poderosas.

Una forma de expresar el alcance de ese protagonismo de la ciudadanía es el lema (traducido) de la manifestación de Barcelona: *El pueblo somos la solución*. Su contenido, recogido en el título de esta sección, sirve para comentar el doble significado de estas resistencias ciudadanas. Por un lado, en el plano social, como conformación de una amplia conciencia social crítica, una participación masiva, democrática y cívica; es la palanca para generar una dinámica de cambio sociopolítico y relaciones sociales, frente a la resignación y el fatalismo. Su orientación es frenar la involución social y condicionar una gestión más equitativa de la crisis económica. Así, por otro lado, en el plano programático, esa movilización popular se guía y complementa con propuestas concretas y alternativas más generales de transformación progresista, económica, política y social. Estas respuestas ciudadanas constituyen un paso clave para la conformación de una alternativa distinta en la actual encrucijada.

El movimiento 15-M sigue contando con una gran legitimidad social

Veamos, en primer lugar, el alcance de estas movilizaciones y su legitimidad. El movimiento 15-M ha sido cauce de expresión de la indignación ciudadana. Ha combinado grandes manifestaciones de protesta y exigencia de cambios (15-M, 19-J, 15-O, del año 2011; 12-M y 25-S del año 2012, y 23-F y 12-M del año 2013), con actividades locales y reivindicativas descentralizadas y procesos deliberativos asamblearios y en las redes sociales. Como se decía antes, se pueden distinguir tres niveles de intensidad en esa vinculación: un primer nivel de unos pocos miles de *activistas* más comprometidos y persistentes; un segundo nivel de una *ciudadanía activa*, personas participantes, sobre todo, en las masivas formas colectivas de expresión



popular, que se puede cifrar en varios centenares de miles; un tercer nivel, *ciudadanía indignada* o descontenta, en torno a dos tercios de la población que simpatiza de alguna manera con objetivos y acciones de ese movimiento.

El movimiento 15-M, en sentido estricto o de articulación permanente, lo conforman los grupos de activistas. Desde algunos de sus sectores más activos a veces se identifica sólo con ese nivel, o se asimila al resto con el mismo. En sentido contrario, en algunos ámbitos mediáticos suelen referirse sólo a esta parte más organizada para intentar estigmatizarlo como minoritario o radical. Pero, el movimiento 15-M, en un sentido amplio, también lo conforma esa ciudadanía activa que ha participado en sus grandes manifestaciones y apoya expresamente sus iniciativas y objetivos generales. Durante esos meses, desde octubre del año 2011 hasta mitad de mayo de 2012, los grupos de activistas han realizado un arduo y prolongado trabajo de inserción, vinculación y revitalización del tejido asociativo en barrios y pueblos y promovido numerosas actividades locales. Ante la ausencia, en ese periodo, de una gran movilización general y expresiva y los límites en la capacidad reivindicativa, apareció la incógnita de la posible desaparición de este movimiento social, o bien, su reducción a la parte más activista, aventurando la desactivación de esa ciudadanía activa y su aislamiento de la comprensión y la simpatía de esa amplia base popular indignada. El resultado de esas movilizaciones de mayo de 2012, continuadas en septiembre de 2012 (“Rodea el Congreso”) y, especialmente, con las manifestaciones masivas del 23 de febrero de 2013, ha sido positivo, y ha demostrado, a pesar de las dificultades, la continuidad del movimiento y la vinculación de los tres niveles de la ciudadanía.

La participación masiva y la simpatía explícita de la mayoría de la sociedad han confirmado la legitimidad de este movimiento social, así como su importancia para expresar unas aspiraciones populares y juveniles de cambio socioeconómico y político y condicionar la dinámica sociopolítica, desde el fortalecimiento de la participación democrática y pacífica de una ciudadanía activa. Ante la persistencia de los problemas que lo originaron, siguen vigentes sus objetivos generales y su tipo de expresión colectiva. Y así lo percibe la mayoría de la sociedad.

Efectivamente, según la encuesta de opinión de *Metroscopia (El País, 13-5-2012)*, realizada unos días antes de esa movilización, más de dos tercios de la población (68%) *asegura que tienen razón en las cosas que dicen y por las que protestan*, y más de la mitad considera que es *un movimiento que lo que pretende es regenerar la actual democracia* (55%) y dice tener *simpatía por el movimiento* (51%). Estos porcentajes han descendido ligeramente



desde el año anterior (entre el 13% y el 16%), probablemente entre las personas identificadas como de centro-derecha. Así, son mucho más amplios sus apoyos entre los electorados de las izquierdas y menores entre los de las derechas –incluso a un tercio (33%) le *inspira rechazo*-. Además, este movimiento es valorado como *pacífico* por la mayoría (55%) y como *radical y antisistema* por una minoría (29%).

Tras las movilizaciones del 12-M-2012, aumenta el apoyo ciudadano a este movimiento. Así, en la segunda encuesta de *Metroscopia* (*El País*, 19-5-2012), el porcentaje de simpatía asciende al 68% (el 75% entre los jóvenes), superior también al del año anterior, y el de rechazo desciende al 22%. Tras esa experiencia, la gran mayoría de la sociedad cree que el movimiento 15-M, básicamente tiene razón (78%, frente al 68% la semana anterior a las manifestaciones, y sólo el 14% considera que no tienen razón) y quiere que continúe.

No obstante, a pesar de las dificultades para articular las resistencias ciudadanas y los intentos institucionales y mediáticos de deslegitimación y minusvaloración de esa acción colectiva, junto con distintos procesos sociopolíticos y electorales, lo relevante es que todavía la mayoría de la sociedad comparte objetivos y apoya la existencia y la actividad de este movimiento social. Dicho de otra manera, persiste y se reafirma una ciudadanía indignada que simpatiza con la función de la protesta colectiva de esa ciudadanía activa: frenar la dinámica de injusticia y recortes sociales y superar el déficit democrático de las élites e instituciones políticas.

Esa amplia legitimidad popular del movimiento 15-M, contrasta con la poca confianza ciudadana en los máximos líderes políticos y las políticas gubernamentales regresivas, junto con la exigencia de responsabilidades a los mercados financieros. En la primera encuesta citada, el 61% de la población *desaprueba* la gestión de Rajoy como presidente del Gobierno (32% la *aprueba*), y en el caso de la gestión de Rubalcaba como líder de la oposición, el 64% la *desaprueba* (28% la *aprueba*). Pero todavía aumentan más los índices de desconfianza hacia ambos líderes: a tres cuartas partes de la sociedad les inspiran *poca o ninguna confianza* (73%, Rajoy; 79%, Rubalcaba), y en torno a una cuarta parte, *mucha o bastante* (26% Rajoy; 20% Rubalcaba); lo cual indica también las dificultades de renovación y legitimación del partido socialista y su labor de oposición. A la pregunta si *el Gobierno está sabiendo hacer frente de forma adecuada a la situación económica*, la respuesta *NO* es del 60% (*SÍ*, el 33%), el mismo porcentaje que critica los recortes. Y como dato complementario, para la población los dos máximos *responsables de la actual crisis económica española* son los *Bancos y Cajas* (9,2 puntos en una escala



de 0 a 10) y el *Gobierno* (8,2 puntos) –*por no haber reaccionado a tiempo y no haber sabido adoptar las medidas necesarias*-.

No cabe duda de que los Parlamentos y Gobiernos (central y autonómicos) tienen una gran representatividad y legitimidad derivada de sus amplios apoyos electorales, y que el PP aún no contando con el apoyo mayoritario en las urnas tiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y un amplio margen de maniobra político y legal. Pero esa delegación representativa no es absoluta ni incondicional, y sigue erosionándose su legitimidad social. Así, es evidente que la mayoría de la sociedad, y especialmente la izquierda social, por un lado, sigue estando en desacuerdo con los recortes sociales, con poca credibilidad para la élite política y financiera, y por otro lado, simpatiza con una movilización popular que los cuestiona activamente y reclama otro tipo de gestión más progresista y democrática.

Persisten motivos y condiciones para la continuidad de una ciudadanía activa

En España han cambiado algunos aspectos del contexto, principalmente, tres. 1) La principal gestión política e institucional es ahora de la derecha del PP (y CIU), que aun con una renovada legitimidad electoral, ha imprimido un plan de fuertes recortes antisociales (educación, sanidad...) y reformas regresivas (laboral...). 2) Se agravan las consecuencias sociales de la crisis económica (paro masivo, pobreza y brechas sociales, desahucios...), sin perspectivas de creación de empleo. 3) El panorama sociopolítico ha cambiado esa primavera del año 2012 respecto de la del año anterior: por un lado, ya han pasado las dos campañas electorales del año 2011, y por otro lado, al mismo tiempo, se ha producido una gran movilización social promovida por el movimiento sindical (huelga general del 29 de marzo, precedida por las grandes manifestaciones del 19-F).

En definitiva, persistían los motivos de fondo para manifestar la indignación ciudadana (las consecuencias de la crisis, y la gestión regresiva gubernamental), pero cambiaba el papel de algunos agentes relevantes: la responsabilidad principal de las medidas de austeridad ya no es del PSOE, y los grandes sindicatos también se han enfrentado a los recortes sociales.

Junto con esos tres factores hay que añadir un cuarto: la prueba de la propia capacidad de los grupos de activistas. Mayoritariamente jóvenes, existe una gran heterogeneidad de sus experiencias anteriores, vínculos asociativos, inclinaciones sociopolíticas y talentos integradores. La función unitaria y de



liderazgo, para encauzar un movimiento social amplio, es difícil. Existen debilidades y limitaciones para encarar la complejidad y la dimensión de estos problemas y oportunidades. Los riesgos de su fragmentación o su desorientación eran evidentes. Tenían un gran reto: seguir conectando con las ideas fuerza presentes en esa ciudadanía activa, mantener la simpatía de la mayoría de la sociedad, y acertar con una propuesta de expresión masiva que diese nuevamente visibilidad e influencia pública a ese movimiento. Han debido sostener una actividad prolongada y poco visible, de arraigo social, deliberación de propuestas e iniciativas y articulación organizativa, que permitiesen dar sentido a ese esfuerzo continuado. Y, al mismo tiempo, debían encauzar un tipo de expresión ciudadana masiva y pacífica que formaba parte de su identidad de origen y prestigio social, en este nuevo contexto social y temporal.

No obstante, articular una estructura organizativa y en red exige esfuerzos y características organizativas adicionales de los grupos de activistas: mayor complejidad de los procesos deliberativos y de decisión, la combinación entre participación abierta y operatividad, entre liderazgos y horizontalidad o igualdad participativa. Es decir, entre, por un lado, el sano talante antiburocrático y antijerárquico y el impulso participativo en condiciones de igualdad y, por otro lado, la especialización de tareas y la especificidad de las funciones de coordinación y representación. Igualmente, en el plano de los discursos y dentro de la amplia pluralidad interna permanece el desafío de la maduración del significado de las ideas clave que conforman el núcleo de su orientación: la democratización del sistema político y la más amplia participación ciudadana en los asuntos públicos y el rechazo a la política de austeridad, el reparto injusto de las consecuencias de la crisis y la exigencia de un cambio de la política socioeconómica en el sentido de mayor justicia social.

Toda esta actividad del movimiento 15-M, en sentido amplio, ha estado condicionando la conciencia social de la ciudadanía y, particularmente, su actitud de simpatía hacia este movimiento y la gran movilización del 12 de mayo de 2012. El movimiento ha salido airoso de ésta, aunque el proceso y su continuidad siguen siendo complejos y difíciles. La siguiente movilización general el 25 de septiembre –*Rodea el Congreso*– ha sido significativa, aunque algunas actividades posteriores han tenido una participación menor. Sin embargo, como se ha comentado, las recientes manifestaciones del 23 de febrero y el 12 de mayo de 2013, han vuelto a expresar una participación masiva y la articulación del tejido asociativo progresista.

Por tanto, la respuesta popular masiva de esos meses no era sólo *emocional* o superficial, destinada a su *evaporación* inmediata. Ha estado y está enraizada en una profunda y persistente conciencia ciudadana indignada y



de denuncia de la injusticia social. Es, sobre todo, una respuesta colectiva, con gran fundamentación ética igualitaria y solidaria, e incrustada en la realidad de las graves condiciones de vida y las aspiraciones de mejora de millones de personas. Además, aumenta la gravedad de la situación socioeconómica y los motivos de descontento persisten. Y todos los intentos de las instituciones políticas y económicas para relegitimar la misma política de austeridad, con distintos discursos y retóricas, pero desconsiderando una gestión más equitativa y democrática, no han conseguido la confianza ciudadana. Las élites poderosas tienen un importante problema de credibilidad social, que no es pasajero ni pueden infravalorar.

De forma soterrada y, a veces, expresa, permanecen la exigencia popular de rectificación de esa política y la pugna democrática por la legitimidad de los distintos gestores y representantes públicos. Por un lado, se encuentran agentes institucionales y económicos que representan una orientación regresiva (Gobierno, mercados financieros...). Por otro lado, existen varios agentes sociopolíticos (el movimiento 15-M con sus masivas protestas, o el movimiento sindical con las huelgas generales y las movilizaciones contra los recortes...) que, junto con otros grupos sociales y políticos, representan una amplia opinión popular de rechazo a esas medidas y expresan una dinámica de cambio progresista.

El poder político, aun amparado en el sistema representativo electoral, tiene un doble componente: democrático, influido por la voluntad popular; oligárquico o elitista, condicionado por los grupos poderosos que defienden sus privilegios. Así, importantes sectores de la sociedad siguen viendo conveniente la existencia de esta acción colectiva progresista como factor positivo en este contexto de relaciones de poder desventajosas. Particularmente, en el plano social y democrático, en cuanto es un factor fundamental cuyo desarrollo puede consolidar las resistencias ciudadanas, propugnar un auténtico cambio de las políticas de ajuste y austeridad y abrir un horizonte de una salida económica e institucional más equilibrada, justa y democrática.

La alternativa principal está en el refuerzo de las resistencias ciudadanas

Esta ciudadanía activa o estos movimientos populares no sólo *denuncian* las injusticias sociales y los déficits democráticos, tal como dicen algunos pensadores como el francés Morin (2012); también *enuncian*. Tienen propuestas concretas y objetivos generales que cuestionan la dinámica liberal-conservadora dominante y apuntan a un modelo más democrático y más justo.



En el primer caso, por ejemplo, han reunido y deliberado sobre varios miles de demandas y reivindicaciones, agrupadas en varios bloques: económico-social (frente a los recortes laborales, educativos y de sanidad, en defensa del empleo decente, la protección social o los derechos sociolaborales, o bien sobre la vivienda, la dación de pago en las hipotecas, así como la regulación del sistema financiero y sus gestores...); político (reforma de la ley electoral, democratización del sistema político...), y de participación ciudadana (refuerzo del tejido asociativo, procesos deliberativos y decisorios amplios y democráticos, talante anti-burocrático, autonomía de los poderes institucionales...). Entre los objetivos generales siguen vigentes las dos ideas-fuerza originarias: mejor democracia, y una gestión socioeconómica más justa. Respecto de objetivos concretos ha cobrado especial relevancia la movilización social y la iniciativa legislativa popular contra los desahucios, apareciendo ante la ciudadanía como más efectiva su defensa que la acción gubernamental del PP o la labor opositora del PSOE, que sufren una gran pérdida de credibilidad.

Según una reciente encuesta de *Metroscopia* (diario *El País*, 17 de marzo de 2013) a la pregunta *¿En quién confiaría para la defensa eficaz de sus intereses si se encontrara en riesgo de desahucio por no poder seguir pagando la hipoteca de su casa?*, la respuesta *Sí* se da a *La Plataforma de Afectados por la Hipoteca* (81%) y las *ONG de defensa de los desfavorecidos* (76%). Mientras tanto, *El actual Gobierno* solo alcanza el 11% de confianza y el *Principal partido de la oposición*, el 10%. En estos casos la gran mayoría de la sociedad no confía en ellos (87% en el Gobierno y 86% en el PSOE); además hay que destacar que gran parte de sus respectivas bases sociales tampoco ven eficaz la defensa del Gobierno del PP (75% de su electorado) y del PSOE (78% de sus votantes). La gente confía más en su *abogado* (75%), los *jueces y fiscales* (47%) y, con menos intensidad, en *otros partidos con representación en el Congreso* (24%).

Los grandes poderes económicos y políticos sólo conciben una opción: la política liberal-conservadora de ajuste y austeridad. Para ellos no hay alternativas, la solución es el sometimiento popular. Es verdad que en el ámbito institucional europeo y español, la orientación dominante es antisocial, con estancamiento económico, paro masivo y reestructuración regresiva del Estado de bienestar. Ello perjudica, especialmente, a la mayoría social de los países débiles del sur de Europa, entre ellos España. La alternativa programática es otra política social y económica, basada en la creación de empleo y las garantías de los derechos sociolaborales y democráticos. La dificultad principal no es de *programa* (aunque sea compleja una elaboración completa y difícil establecer sus prioridades), sino de suficientes energías ciudadanas para



impulsarlo. Se necesitan afinar propuestas y elaborar nuevas teorías sociales, cuestiones cruciales, pero el factor fundamental es la amplitud y la activación del apoyo social a una orientación de cambio progresista. Es el camino iniciado en el año 2010 por el movimiento sindical con diversos altibajos, que ha recorrido también el movimiento 15-M, y que en primavera y otoño de 2012, ha vuelto a impulsar el sindicalismo y la Cumbre Social con los procesos de dos huelgas generales.

Con la demanda de una amplia izquierda social y política en Francia y la positiva victoria del socialista Hollande, se ha puesto encima de la mesa de las instituciones europeas otra política, la de *crecimiento económico*. No obstante, las derechas hegemónicas y la socialdemocracia europea, particularmente la alemana, no cuestionan los ejes principales de la política aprobada por el Consejo Europeo de austeridad fiscal y ajuste económico, y sólo apuestan por *complementarla*, con otras medidas estimuladoras de la demanda y la inversión. Pero, sin una impugnación global de esa política regresiva y su reorientación hacia la prioridad del crecimiento de empleo decente y la modernización productiva del Sur, con una solidaridad europea y una reafirmación de su modelo social, las consecuencias son la prolongación de la crisis, las fuertes desigualdades sociales y el sufrimiento para amplios sectores populares. Los efectos más perniciosos no sólo llegan a Grecia (o Portugal) sino también a España, Italia e incluso Francia. La solución se encuentra en cada país y en el ámbito europeo, pero sobre todo atañe al campo social, a la consistencia de fuerzas sociales y democráticas suficientes para forzar otra estrategia de gestión y salida de la crisis, que condicione y refuerce a las izquierdas y apueste por una opción progresista.

En definitiva, la solución principal se encuentra en la respuesta del pueblo, en la soberanía popular y la regulación pública frente a los mercados financieros, en la actitud ciudadana de participación cívica frente a la injusticia social y por una democracia social más avanzada.

6. Cambios sociopolíticos y de mentalidades juveniles

En otoño de 2010, tal como se ha detallado, ya se dan en España los rasgos principales de un nuevo ciclo de la protesta colectiva: 1) amplia conciencia social de una situación injusta y una gestión económica y política regresiva y antisocial, es decir, la configuración de una amplia corriente social descontenta e indignada; 2) percepción social de un bloque de poder, con los responsables o causantes contra los que se dirigen el descontento y las exigencias (Gobierno o clase política gobernante, poder económico y



financiero, instituciones de U.E. –Bruselas, Berlín y Frankfurt- y la ‘troika’ -FMI, BCE, CE-, élites ricas o poderosas...); 3) amplia movilización colectiva de una ciudadanía activa, con unos agentes sociales definidos (primero el sindicalismo, luego el movimiento 15-M y después ambos) y un ‘empoderamiento’ de la ciudadanía crítica, como sujeto activo (*sí podemos*), frente al fatalismo y la resignación (*no hay alternativas ni margen de maniobra*), y con capacidad de influencia; 4) motivos socioeconómicos (contra la austeridad y los recortes sociolaborales...) y políticos (otra gestión política, respeto gubernamental a los compromisos sociales, democratización...), donde se combinan objetivos más concretos (*Reforma de la ley electoral, No a la reforma laboral, No a los recortes y los desahucios, empleo decente,...*) y más generales (rectificación de la política de austeridad, cambio global, derechos sociales, más democracia,...).

Cultura democrática y de justicia social

El encadenamiento de los cuatro tipos de factores, distintivos del periodo actual, marca la orientación, el carácter y la identificación social, democrática y progresista de estas protestas sociales. Se producen desde la esfera social hacia (o frente) las medidas y estrategias liberal-conservadoras y el déficit democrático de las grandes instituciones políticas; generan un brecha social con la clase política gobernante, conformándose un nuevo y más amplio campo sociopolítico progresista distanciado del gobierno socialista, gestor inicial de una política regresiva, y después, de forma más contundente, respecto del gobierno de la derecha.

En el campo cultural e ideológico, se generan nuevas ideas fuerza en la izquierda social y, particularmente, entre gente joven. La cultura democrática y de justicia social de la ciudadanía progresista o los valores igualitarios y solidarios de los sectores juveniles más inquietos, se confrontan con las nuevas realidades socioeconómicas y políticas. Ante la gestión institucional y económica antisocial e impuesta, se desarrolla una nueva conciencia social sobre componentes sistémicos: desconfianza en el poder económico e institucional (responsables de la crisis y la gestión regresiva), pertenencia al segmento de los de ‘abajo’, los perjudicados y desfavorecidos, reafirmación de la indignación ciudadana desde la cultura igualitaria de la justicia social y legitimación de la acción colectiva y democrática frente a la involución social y política.

Esas percepciones se van consolidando y conforman una nueva visión sobre la estructura social, el poder económico e institucional y los mecanismos



y agentes de influencia sociopolítica y democrática, a diferencia de la mentalidad dominante en el periodo anterior. Es decir, se produce un choque entre las políticas dominantes de la clase política gobernante y los mercados financieros, que acentúan el deterioro de las realidades económicas e institucionales de la sociedad, y los intereses y la conciencia democrática y de justicia social de la mayoría de la ciudadanía.

Así, se generan elementos culturales emergentes que afectan a la percepción de la nueva cuestión social y la necesaria regeneración democrática. Y, dado el bloqueo institucional junto con la responsabilidad del PSOE por su giro antisocial, se abre paso la iniciativa popular y la protesta colectiva con una reafirmación de esa cultura democrática e igualitaria. La existencia de unas estructuras de movilización ciudadana y la construcción de otras nuevas, permitirán articular esas protestas colectivas. Están enmarcadas, por una parte, por las agresiones de los poderosos, con sus recursos institucionales y el intento de subordinación de la ciudadanía, y por otra parte, por el descontento social derivado del sufrimiento, empobrecimiento e incertidumbre de la mayoría de la sociedad. El acierto en la elección del momento, los lemas y los cauces expresivos, será un complemento fundamental para lograr la masividad, la persistencia y la orientación social y democrática de este amplio y heterogéneo movimiento de protesta.

Los sentimientos humanitarios y solidarios, típicos de los jóvenes inconformistas de los años noventa y primeros dos mil, se enfrentan a una nueva realidad, se modifican y profundizan y se amplían a nuevos sectores sociales. No se trata solo, o principalmente, de respuestas a problemas 'externos' a su realidad inmediata sobre los que se movilizan y 'solidarizan' para paliarlos o mejorarlos. En España, la anterior experiencia solidaria se situaba en un contexto determinado: crecimiento económico y de empleo, desarrollo social, cultural y de derechos y expectativas laborales, individuales y colectivas, de ascenso social y profesional (aunque permaneciesen amplias zonas de precariedad laboral y de exclusión social).

Con la crisis del empleo y los recortes sociales, esas trayectorias de mejora progresiva del estatus socioeconómico, cultural y político de los jóvenes se bloquean y, mayoritariamente, perciben las dificultades y retrocesos para ellos mismos. La injusticia social (el paro, los recortes sociolaborales, la gestión institucional regresiva...) les afecta directamente y de forma profunda y duradera. Por tanto, junto con la crisis socioeconómica y la gestión política antisocial, cambian su experiencia, sus ideas, sus intereses inmediatos y su horizonte vital e ideológico. El motivo de su protesta es directo, sobre todo, evitar para ellos mismos y su entorno inmediato, un retroceso de su posición



social y garantizar su futuro material y de derechos. En ese sentido, su conciencia y su comportamiento tienen que ver más con la demanda de igualdad social y más democracia, que son los dos elementos sistémicos cuestionados por el poder económico y político. La solidaridad se fortalece a través de la pertenencia común al bloque de los perdedores o con desventaja, a la reciprocidad de los propios sujetos afectados y la comprensión y el apoyo colectivo entre ellos. La conciencia social sobre los obstáculos o los adversarios se va reconfigurando y se debilita la visión normalizada de la capacidad de gestión positiva (u ordinaria) de las grandes instituciones y los líderes gobernantes. Y esa deslegitimación política del poder o las élites gerenciales e institucionales se contrapone con una participación y un apoyo masivos a la protesta social, con la legitimidad de agentes sociales significativos.

Por tanto, las ideas sobre estos elementos sistémicos de los jóvenes avanzados socialmente, al igual que la misma generación de la década anterior, se siguen basando en la cultura democrática, igualitaria y solidaria, pero se confrontan con otra realidad, se renuevan y reafirman. Ello da lugar a otras ideas fuerza, a la transformación del sentido e implicación práctica de esos valores. Y los jóvenes indignados de ahora expresan nuevas demandas y actitudes sociopolíticas y otras formas masivas de comunicación y protesta (Morán, 2013).

En consecuencia, hay que reconocer las nuevas evidencias, la nueva 'cuestión social' y de falta de legitimidad de las grandes instituciones políticas y el poder financiero y político, elaborar nuevos conceptos e interpretarlas con un nuevo esfuerzo teórico y un pensamiento crítico. Los actuales jóvenes inconformistas y sectores amplios de la ciudadanía activa van conformando algunas ideas fuerza (no ideologías) y su contenido y su orientación, en general, son realistas e igualitarios. Los tres factores se encadenan y cristaliza la protesta social: gravedad de los problemas y recortes socioeconómicos para la mayoría de la sociedad; gestión política e institucional regresiva, y cultura democrática y de justicia social con la activación de distintos agentes y movilizaciones sociales. Supone la combinación de tres dinámicas: 1) descontento por el empobrecimiento, la subordinación y la injusticia; 2) percepción de los responsables de esa situación y descrédito del poder, y 3) movilización colectiva, deseo de cambio y expectativas y oportunidades transformadoras o de influencia.

Nuevos sujetos sociales por la igualdad y la democracia



La actual realidad social afecta a tres cuestiones clásicas de la teoría social, aunque de forma nueva: conciencia y pertenencia social (los de abajo, el pueblo...), conformación de sujetos colectivos y aspiraciones transformadoras. La realidad de la crisis, la austeridad y el sistema político poco democrático, han chocado con una cultura democrática y de justicia social, asentada en una experiencia ciudadana de derechos sociales y democráticos adquiridos y una cierta ética o valores igualitarios.

La dinámica ordinaria de la participación electoral para que una representación política articule la gestión de los asuntos públicos, se ha mostrado insuficiente. El esquema liberal representativo (desarrollo económico y Estado de derecho), ha mostrado sus límites y el actual orden capitalista neoliberal ha desembocado en una crisis sistémica: las élites económicas y políticas han perdido credibilidad en su responsabilidad para gestionar la economía y los asuntos públicos. El sujeto soberano del pueblo o la ciudadanía, que expresa su opinión a través de su representación parlamentaria, ha sido desplazado por sectores minoritarios oligárquicos que controlan la economía y el poder institucional y dictan el devenir regresivo de la sociedad. Ante esa subordinación se produce una dinámica contraria de empoderamiento de la propia sociedad, de reafirmación del auténtico sujeto soberano para definir los proyectos sociales, económicos y políticos. Es una vuelta a los fundamentos de la democracia, de la participación popular como fuente de legitimidad y decisión, a la necesidad de un nuevo proceso constituyente.

Los anteriores movimientos sociales –viejos, como el sindicalista, y nuevos, como los ecologistas, feministas, pacifistas o de solidaridad internacional- pugnaban por la redistribución y el reconocimiento. Se han forjado en la experiencia de distintos procesos contra la discriminación, la inseguridad y la desigualdad. Han promovido amplias resistencias colectivas frente a nuevas agresiones, retrocesos y recortes en distintos ámbitos y planos (desde la oposición a la entrada en la Otan y a la guerra de Irak, pasando por el rechazo contra los riesgos medioambientales y la discriminación de las mujeres, hasta la protesta contra el paro, las reformas laborales o los desahucios o el apoyo a la integración de los inmigrantes). En los momentos más conflictivos y movilizadores, junto al avance respecto de los objetivos inmediatos, se llegaba a cuestionar elementos fundamentales de la estructura económica o de poder y generar un amplio cambio de mentalidades. En su conjunto, incluido el movimiento sindical, en los años anteriores habían pasado un periodo de cierta debilidad de su capacidad movilizadora y articuladora. Esos movimientos sociales y el tejido asociativo progresista siguen teniendo



vigencia y se deben reforzar. Ahora se añaden más motivos concretos para la protesta social y nuevos procesos de activación ciudadana.

Pero, además, en este ciclo sociopolítico, la ciudadanía activa, como suma y convergencia de la participación democrática y progresista en la protesta social, adquiere una nueva dimensión, más global o sistémica, y un carácter todavía más social y democrático, al cuestionar las dinámicas socioeconómicas desiguales y el déficit democrático de las grandes instituciones políticas. Es una faceta que está cambiando las mentalidades de amplios sectores de la sociedad y que incorporan también las organizaciones y grupos sociales progresistas existentes. Además, esa cultura cívica, democrática, igualitaria y de participación en los asuntos públicos, genera una motivación adicional y constituye un elemento identificador de los sectores activos y los que apoyan o legitiman esta nueva protesta social masiva.

En definitiva, la conciencia social de amplios segmentos populares está cambiando, al ser más evidente la subordinación y el bloqueo vital de la mayoría de la sociedad. Se traduce en una percepción más realista respecto del carácter y distribución injustos del poder. La ciudadanía ha tenido que reafirmar y reelaborar sus fundamentos culturales y éticos. Finalmente, significativos segmentos populares han transformado sus preferencias u opciones sociopolíticas, afianzando la necesidad de promover el cambio social, arbitrando mecanismos expresivos y organizativos y legitimando la acción democrática de las nuevas movilizaciones ciudadanas y sus distintos agentes colectivos.

En conclusión, el factor sociopolítico de cambio se conforma con la suma e interacción de tres componentes: 1) la situación y la experiencia de empobrecimiento, sufrimiento, desigualdad y subordinación; 2) la conciencia de una polarización, con una relación de injusticia, entre responsables con poder económico e institucional y mayoría ciudadana (aun con amplios sectores intermedios o neutros); 3) la conveniencia y posibilidad práctica de la acción colectiva progresista, articulada a través de los distintos agentes sociopolíticos. Y se desarrolla masivamente frente a agresiones inmediatas, en los momentos en que confluyen con mayor intensidad esos elementos y a través de los cauces con mayor credibilidad social para su capacidad expresiva e influencia transformadora. Son dinámicas emergentes, todavía falta por saber cómo van a evolucionar y si se consolidan o no. Pero son suficientemente consistentes como para hablar de un nuevo ciclo sociopolítico, una nueva fase de la protesta colectiva progresista, con novedades relevantes respecto del periodo anterior. Constituyen un nuevo estímulo para un pensamiento crítico y una acción transformadora.

7. Conclusiones, interrogantes y perspectivas

En resumen, y tal como se ha avanzado, aparecen cuatro factores que definen el contexto actual y su persistencia: 1) agravamiento de las consecuencias sociales de la crisis socioeconómica (desigualdad, empobrecimiento, paro), acentuadas por la política dominante liberal-conservadora; 2) gestión antisocial de las grandes instituciones y élites políticas gestoras europeas y estatales, con reparto injusto de sus costes a las capas populares, retroceso de los derechos sociolaborales y proceso de desmantelamiento del Estado de bienestar; 3) reafirmación del bloque de poder financiero (representado por Merkel), con nuevos discursos justificativos, debilitamiento de la calidad democrática de las instituciones e intento de relegitimación de los poderosos (financieros y clase política), con subordinación de las mayorías sociales y el sur periférico; 4) por otro lado, se genera una nueva conciencia social, basada en una cultura ciudadana de la justicia social, con la defensa de los intereses de las capas populares y la exigencia de democratización del sistema político.

Aparecen dinámicas de cierta polarización social, por una parte, los causantes, culpables y corresponsables de las graves consecuencias de la crisis, que constituyen un foco de malestar e indignación ciudadana y, por otra parte, los perdedores, las víctimas 'inocentes'. Se establece una pugna sociopolítica y de caracterización simbólica de la sociedad. Ya no hay indiferenciación de categorías sociales o visión de existencia de solo clase media (con unos pocos ricos y otros pocos excluidos), sino que se percibe una estructura piramidal: arriba una cúpula agresiva, antisocial y con tendencias autoritarias, y abajo una amplia capa de desfavorecidos, aunque fragmentados; en medio, sectores más o menos acomodados y con incertidumbres sobre su trayectoria presente y futura. Se esclarece la consistencia y la realidad del poder financiero e institucional ilegítimo, con poca confianza de la ciudadanía y precisamente causante del sufrimiento y la subordinación de la mayoría de la sociedad.

Gran parte de la ciudadanía se distancia de sus líderes políticos y económicos y percibe cierta orfandad; sectores progresistas y de izquierda sufren un doble desengaño por la colaboración de los gobiernos socialistas en la política liberal-conservadora de austeridad. Pero otras alternativas político-electorales tienen una difícil y lenta maduración. Ante el abandono o la subordinación a los poderosos (acreedores financieros, con la devolución de la deuda y la reducción del déficit –sin subir impuestos- como prioridad) en



amplios sectores de la población se genera un grave problema de desconfianza y credibilidad social respecto de la clase política gestora de esas políticas. Se conforman nuevas imágenes sobre la estructura social, más realistas y adecuadas, aunque no exentas de esquematismos. En la esfera pública y mediática se ven no solo los perdedores sino también los ganadores, los de abajo y los de arriba, las mayorías sociales y las minorías elitistas y los poderosos, la ciudadanía y los mercados financieros (apoyados por las grandes instituciones internacionales y estatales).

Con la crisis económica, derivada de la desregulación de los mercados financieros y la explosión de la burbuja inmobiliaria, se produce una ruptura de la dinámica de 'desarrollo' económico anterior, se impone la contención del gasto público y la reestructuración regresiva y gradual del modelo social (avanzado) europeo. Se definen los adversarios pudientes, así como la conciencia colectiva de cierta pertenencia a un campo de los sectores perjudicados e indignados. De ahí se establecen los objetivos a conseguir. Los de arriba llevan ventaja y la iniciativa; los de abajo están a la defensiva. Los primeros tienen más poder, pero son menos; los de abajo son más y tienen mayor legitimidad social aunque poseen menor fuerza institucional y económica. El distinto posicionamiento de los sectores intermedios, particularmente en su comportamiento sociopolítico, le da mayor apoyo a los sectores activos vinculados con los de abajo o bien mayor cobertura a los de arriba.

En conclusión, la acción cívica tiene una doble dimensión: 1) social o expresiva; 2) reivindicativa y de gestión de mejoras. La acción transformadora puede ser inmediata y práctica, pero hay que definir su sentido. Qué se llama influencia 'efectiva' o qué son 'resultados prácticos' y cómo medirlos. Qué mecanismos se establecen de reforma social, cuáles son los sujetos sociales y cómo se conforman los campos sociales y político-electorales. Y qué tipo de obstáculos, capacidades transformadoras, dinámicas y ritmos de los cambios sociales existe. Qué legitimidad alcanzan los distintos actores sociales y políticos y cómo se configuran las nuevas estructuras sociales y el grado de cohesión social.

Hay dificultades para una gestión progresiva parcial, de carácter asistencial o reivindicativo, en el marco de tendencias regresivas generales. Igualmente, son difíciles los avances de conjunto o los frenos significativos a los retrocesos impuestos, sin erosionar al poder, sus principales políticas y la legitimidad de sus gestores. Por tanto, hay que integrar y combinar la doble dinámica. Por un lado, la influencia y la transformación, el avance en los resultados inmediatos en el campo sociopolítico y cultural (de legitimidad), así



como en el sustantivo de las mejoras materiales y de derechos; o, bien, en el freno a la imposición de medidas o ajustes estructurales regresivos. Por otro lado, el fortalecimiento de la capacidad 'expresiva', la conciencia cívica, la mentalidad solidaria y la articulación de fuerzas sociales y presiones sociopolíticas. Hay que valorar la cristalización de la dimensión social de un movimiento sociopolítico en impactos sobre medidas o situaciones concretas de mejoría material para la gente, particularmente, la desfavorecida. Al mismo tiempo que mirar cómo se conforman las transformaciones o las condiciones para los cambios económicos y políticos del conjunto y a medio plazo. Es decir, la combinación de la concreción estructural político-jurídica y las relaciones interpersonales dentro de las estructuras sociales.

La dificultad es la combinación dentro de la acción 'transformadora' de la dimensión social o expresiva y la reivindicativa (o negociadora-mediadora). Y específicamente, diseñar los plazos, ritmos, condiciones, gestores y responsabilidades. En definitiva qué estrategia, qué disponibilidad y constitución de fuerzas sociales son necesarias, qué deficiencias u obstáculos existen para su avance.

Podemos definir algunos rasgos de esas condiciones sociopolíticas. Primero, ampliar y fortalecer un campo social progresista y de izquierdas, articulado con un fuerte tejido asociativo y participativo y una renovada representación social, autónoma, abierta, plural y democrática. Se ha expresado una corriente social crítica e indignada y una ciudadanía activa, a través de dos movimientos fundamentales: sindicalismo y movimiento 15-M (y sus derivados). Ambos tienen sus límites y dificultades y sigue abierta la cuestión de la consolidación y renovación de unas nuevas élites asociativas o grupos activos. Segundo, la interrelación entre campo social y campo político-electoral: la renovación y la conformación de las élites políticas progresistas y la consolidación de campos electorales tienen su especificidad y autonomía respecto del proceso de configuración de un campo o bloque social amplio.

Aquí aparece la posibilidad o la apuesta por profundizar en el nuevo ciclo sociopolítico y electoral, con el previsible desgaste electoral de las derechas y la recuperación del espacio de izquierdas. Uno de sus elementos es el reequilibrio en su interior. Por un lado, hasta dónde puede llegar la crisis, la adaptación y la refundación del PSOE (y la socialdemocracia europea), y si su reorientación se inclina o no hacia la confrontación con los poderes financieros y la derrota de la estrategia liberal-conservadora de las derechas y la activación de las izquierdas, y ello le facilita apoyos mayoritarios. Por otro lado, la difícil construcción y unidad de las izquierdas plurales, con la superación de su fragmentación, su prioridad, a veces, exclusiva, en el frente institucional o



electoral y algunas inercias poco respetuosas con el pluralismo. Son problemas que abordar para reforzar su arraigo social, particularmente entre la gente joven, y una actitud integradora, con un apoyo social amplio. Además existen dificultades específicas para elaborar un discurso crítico y una teoría social, realistas y rigurosos, superadores de esquemas rígidos del pasado, enraizados en la realidad actual y favorecedores de un proceso de profunda transformación social y política.

La pugna por una salida más justa de la crisis puede presentar ritmos y características desiguales según los distintos ámbitos: local o sectorial, estatal, europeo, mundial. Es importante la evolución del dilema europeo ante la ampliación de las brechas sociales entre países: retroceso global del modelo social (avanzado) europeo, con al menos dos niveles, centro y periferia. El riesgo es la ruptura de la Unión Europea. Existen interrogantes: qué agentes pueden frenar y hasta dónde el desmantelamiento del Estado de bienestar, los derechos sociolaborales y las condiciones salariales, la desigualdad social y la distribución regresiva de la riqueza; cuál puede ser el alcance de la erosión de la política de austeridad, la deslegitimación del poder financiero e institucional o el fenómeno de la desconfianza en la clase política y la afirmación de la expresión pública y democrática en los asuntos colectivos. Como decíamos, existe una desafección justa y merecida hacia los líderes de los partidos mayoritarios, gestores de la austeridad, aunque ese fenómeno sea insuficiente y con algunos rasgos con una evolución imprevisible.

Por otro lado, existe la ambivalencia ciudadana respecto de la representación institucional: apoyo electoral (vía posibilista), y crítica y desconfianza en los líderes con exigencia de cambio del sistema de representación y de representantes. La crítica principal es a 'esta' política, 'estos' políticos, 'este' sistema con déficit democrático. En algunos sectores activos existen excesos verbales y cierta ingenuidad, frente a la necesidad de una representación mediadora y unos gestores públicos especializados, aunque, globalmente, son expresiones de exigencia justa de responsabilidades a los gestores políticos.

Desde la derecha y el poder económico se desacredita o ningunea la esfera de la política democrática y representativa. Pero la crítica ciudadana a los políticos no es por ser 'representantes', 'mediadores' o 'gestores' públicos – en general, o en otros contextos-. Específicamente, se hace por ser corresponsables de la política de ajustes y austeridad, la connivencia con los poderes económicos causantes de la crisis, intentar engañar a la ciudadanía con discursos justificativos, incumplir garantías democráticas (su contrato social



con sus electorados, todavía mayor en el caso del partido socialista) y priorizar sus intereses corporativos, incluso amparar a personas corruptas.

En definitiva, esas críticas son expresiones políticas (o pre-políticas) positivas, de cambio progresista y democrático, contra las principales lacras de la gestión económica y la desvalorización de la política y la democracia por parte de los gestores institucionales y suponen una reafirmación democrática de la ciudadanía. La superación de la disociación o la desafección no se debe realizar por la vuelta de esa amplia conciencia ciudadana de indignación respecto de esta gestión regresiva y el déficit democrático de las grandes instituciones hacia la relegitimación de las élites actuales, la minusvaloración de sus responsabilidades o la disculpa de los errores de su gestión. Se trata de abrir una nueva transición política, un nuevo proceso constituyente, para asegurar una democracia social avanzada. En ese sentido, todavía es necesario profundizar ese proceso crítico, consolidar el campo social progresista, sus agentes sociopolíticos, el asociacionismo y la participación ciudadana. El objetivo debería ser derrotar la política de austeridad, deslegitimar más a la derecha política, promover una profunda reorientación política e ideológica y una gran renovación organizativa en el PSOE, como actual principal partido de la izquierda, con nuevos liderazgos y mayor peso de sus corrientes de izquierda. Y, al mismo tiempo, reequilibrar la hegemonía del partido socialista en el seno del conjunto de las izquierdas, con la configuración de un amplio bloque social y político diferenciado, plural, unitario, democrático y alternativo. Se trata de posibilitar mayor unidad del conjunto de las izquierdas renovadas y fuerzas alternativas, desarrollar una estrategia progresista y poder avanzar hacia una sociedad más igualitaria y democrática.